

REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN



SALA LABORAL
Acta 338

Medellín, treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve el grado de consulta, en el proceso ordinario laboral interpuesto por **ALBA ROBIRIA CALLE VARGAS contra PORVENIR S.A., JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ.**

De acuerdo a lo dispuesto en el art. 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita.

ANTECEDENTES

Pretensiones

La actora solicita que se declare la nulidad del Dictamen emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez de Antioquia del 4 de julio de 2018, el cual le asignó una fecha de estructuración de la invalidez del 31 de marzo de 2016.

Que se declare como valido el Dictamen de la IPS Universitaria de la Universidad de Antioquia del perito José William Vargas Arenas, del 20 de marzo de 2018.

Se condene a Porvenir a reconocer pensión de invalidez a partir del 20 de abril de 2013, con el pago de intereses moratorios y la indexación de las condenas.

Hechos

La actora se afilió inicialmente al ISS hasta el año 2002 cuando se trasladó a Porvenir S.A, entidad en la cual cotizó hasta agosto de 2013.

Tal como lo estableció la IPS Universitaria y la historia clínica la actora desde el año 2006 comenzó a padecer Parkinson juvenil, inicialmente sin diagnóstico claro, pero luego se confirma por neurología y durante todos estos años ha requerido tratamiento médico y quirúrgico con poca respuesta, además de otros padecimientos en cuello, columna vertebral, hombro, dorso y brazo, con rigidez que limita sus funciones.

Debido a la evolución fisiológica de la enfermedad desde el mes de agosto de 2013 y hasta la fecha no pudo volver a trabajar.

En la historia clínica aportada se evidencia que el día 18 de enero de 2013 el médico tratante de la EPS SURA remitió a la actora a calificar su pérdida de capacidad laboral con diagnóstico de dolor crónico en región cervical y dorsal, en manejo por nódulo de columna con múltiples bloqueos y sin mejoría.

El 22 de enero de 2013 la EPS SURA remite a Porvenir S.A., concepto desfavorable de rehabilitación, con el fin que adelante trámites para la calificación de la pérdida de capacidad laboral, el fondo procedió a realizar la calificación el 26 de abril de 2013, en la cual le fue asignada una pérdida de capacidad laboral del 21.57% origen común con fecha de estructuración 17 de enero de 2013.

Asegura que por desconocimiento no presentó recurso por la anterior calificación, pero fue calificada nuevamente por Seguros de Vida Alfa el 27 de noviembre de 2017, en el cual se le asignó una pérdida de capacidad laboral del 63.16 pero con fecha de estructuración del 31 de marzo de 2016, sustentado en argumentos que no se ajustan a la historia clínica, porque en primer lugar la fecha de estructuración era de 2013 y no le dio el PCL, pero luego fue, al contrario.

Interpuso el recurso respectivo y la Junta Regional de Calificación de Invalidez en dictamen del 27 de septiembre de 2017 pese a reconocer que la actora no labora desde el 31 de agosto de 2013 confirmó la fecha de estructuración desde el 31 de marzo de 2016.

Posteriormente la Junta Nacional de Calificación de Invalidez en experticia del 4 de julio de 2018 confirmó el dictamen de la Junta Regional.

En la historia laboral se puede observar que únicamente pudo laborar hasta el mes de agosto de 2013 y que con la fecha de estructuración del 31 de marzo de 2016 no cumple con los requisitos de 50 semanas cotizadas dentro de los 3 años anteriores a esa fecha, a pesar que para 2013 cuando se vio imposibilitada para trabajar acreditaba 781 semanas.

En razón a las inconsistencias presentadas en las calificaciones anteriores, decide realizarse una calificación de carácter particular en la IPS Universitaria de la U de A. con el Dr. José William Vargas Arenas, el 20 de marzo de 2018, quien asignó una fecha de estructuración del 20 de abril de 2013.

Con la calificación y porcentaje que otorgó el perito de la IPS Universitaria la actora acredita los requisitos para acceder a la pensión de invalidez por parte del Fondo Porvenir S.A., toda vez que para el mes de agosto de 2013 fecha en la cual dejó de cotizar acreditaba 503 semanas, es decir, más de las requeridas.

Respuesta de Porvenir S.A.

Manifiesta la apoderada que, la actora no acredita la densidad de cotizaciones requeridas para que se le reconozca la pensión de invalidez, toda vez que no cuenta con 50 semanas dentro de los 3 años anteriores al estado de invalidez, la actora únicamente tiene aportes hasta agosto de 2013.

Se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones: petición antes de tiempo, falta de causa para pedir, inexistencia de la obligación, buena fe y prescripción.

Respuesta Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia:

Manifestó el apoderado que la calificación que se le realizó al demandante fue científica y clara, donde se concluyó que la fecha de la estructuración de la invalidez fue 31 de marzo de 2016.

Se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones: Legalidad, eficacia y obligatoriedad del Dictamen y prescripción.

Contestación Junta Nacional de Calificación de Invalidez:

El apoderado de esta entidad manifestó que no le constan en general los hechos de la demanda, lo que debe probarse en el proceso.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: Legalidad de Dictamen, fecha de estructuración se ajusta a derecho.

Sentencia de primera instancia

La Juez Quince Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del **7 de abril de 2022**, absolvió de las pretensiones de la demanda, por encontrar ajustado el Dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y por tanto la actora no acredita la densidad de semanas requeridas para acceder a la pensión de invalidez. Impuso costas a cargo de la demandante.

Manifestó la Juez que, al realizar un análisis de la prueba traída al proceso y los diferentes dictámenes incluido el que aportó la demandante realizada por la IPS Universitaria, a través del perito José William Vargas Arenas, no le ofrece credibilidad al despacho, toda vez que la fecha de la estructuración que asignó la Junta Nacional se encuentra debidamente documentada.

En el presente caso no se presentó recurso de apelación frente a la decisión de la a quo, motivo por el cual fue enviada a esta judicatura en el grado de consulta a favor de la parte actora.

Alegatos de conclusión

Corrido el término de traslado establecido en el artículo 15 del Decreto 806 de 2020. Porvenir S.A. manifestó:

Sí bien Porvenir S.A. no es la entidad encargada de emitir o participar en el análisis y evaluación de las dolencias de sus afiliados, menos así de emitir diagnóstico o calificación conforme a lo normado en materia y a su función específica en el sistema de seguridad social en pensiones, de resaltar que no existe argumentación médica, científica, fáctica o legal que permita cuestionar o poner en duda los dictámenes que fueron practicados y que gozan de validez pues no se encuentran viciados. Partiendo de la motivación esgrimida por la juez de instancia a quién le asiste razón en cuanto al jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia referente a la apreciación de los dictámenes de pérdida de capacidad laboral y a la calidad de prueba pericial que en ese sentido fue apreciada por la a quo. Ahora y frente al sustento en este tipo de procesos el criterio aplicable resulta de lo prescrito por el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional, así como lo indico de igual forma la falladora de primera instancia, el criterio que se desprende del precedente jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia.

Es por lo anterior que, Porvenir S.A. hace mella en que no existen criterios que permitan cuestionar la calidad de los dictámenes que fueron emitidos por Seguros de Vida Alfa S.A., así como el de la Junta Nacional de Calificación de invalidez toda vez que los mismos se encuentran estricto apego a lo reglado para ellos y fueron emitidos por un grupo interdisciplinarios de expertos que comparten un criterio u opinión, distinto al dictamen emitido por la IPS universitaria Servicios de Salud de la Universidad de Antioquia el cuál no encuentra razones de hecho o derecho para emitir una fecha diferencial para la estructuración de la pérdida de la capacidad, basados cómo se dijo en precedencia en razonamientos de carácter técnico o científico que pongan en

tela de juicio lo dictaminado con anterioridad, especialmente cuando lo aportado cómo material probatorio pretendiendo sea tenido en cuenta cómo un nuevo dictamen por la parte demandante NO cumple con las formalidades exigibles para ello acorde al artículo 226 de C.G.P.

En razón a ello y al contenido de la historia clínica, antecedentes, soportes, valoraciones y demás de la señora Alba Robiria Calle Vargas, constituye el soporte factico y jurídico para los dictámenes que deben ser tomados en consideración, esto es el emitido por Seguros de Vida Alfa S.A. y la Junta Nacional de Calificación; por lo que se reitera que los organismos competentes acorde al Manual Único de Calificación de Invalidez son los reseñados.

Así las cosas, solicito en forma respetuosa se confirme la sentencia impartida por la señora Juez de primera instancia, absolviendo a mi representada de todas y cada una de las pretensiones incoadas.

Problema Jurídico

Los problemas jurídicos a resolver en esta instancia de conformidad con el grado de consulta a favor de la actora serán: i) Determinar si debe dejarse sin efecto los Dictámenes emitidos por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en su lugar darle validez al que realizó el perito de la IPS Universitaria José William Vargas Arenas, en cuanto a la fecha de la estructuración del estado de invalidez (ii) en caso afirmativo sí la actora acredita el derecho a que la Porvenir S.A. le reconozca la pensión de invalidez deprecada, con los intereses moratorios y la indexación de las condenas.

CONSIDERACIONES

Antes de resolver considera la Sala importante realizar las siguientes precisiones de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente:

1. La demandante fue calificada por Seguros de Vida Alfa con una pérdida de capacidad laboral del **63.16 %** de origen común, estructurada desde el **31 de marzo de 2016**.
2. Luego fue calificado por la **Junta Regional de Calificación de Invalidez** de Antioquia entidad que le asignó una fecha de estructuración **31 de marzo de 2016**.
3. **La IPS Universitaria de la U de A.**, por medio del perito **José William Vargas Arenas** le asignó una fecha de estructuración del **20 de abril de 2013**.
4. Posteriormente la **Junta Nacional de Calificación de Invalidez**, confirmó que la fecha de estructuración es del **31 de marzo de 2016**.

Una vez efectuadas las anteriores precisiones procederá la Sala a dar respuesta a los problemas jurídicos propuestos.

Calificación de la invalidez y porcentaje de pérdida de la capacidad laboral

De acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, para efectos de la pensión de invalidez por riesgo común, se considera *“inválida la persona que, por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.”*

De conformidad con el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 142 del Decreto 019 de 2012, el estado de invalidez debe ser determinado de conformidad con el Manual Único para la Calificación de Invalidez-MUCI- vigente a la fecha de calificación, indicando a su vez que corresponde a Colpensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales, las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en primera oportunidad, el origen, fecha de estructuración y el porcentaje de pérdida de capacidad laboral.

Según el artículo 51 del CPT y SS, en el procedimiento laboral son admisibles todos los medios de prueba establecidos en la ley, con la salvedad de la prueba pericial cuya admisibilidad solo será posible cuando tenga por objeto asesorar al juez sobre asuntos que requieran conocimientos especiales, como lo es precisamente el que tiene que ver con la pérdida de capacidad laboral y fecha de estructuración de una persona, aspecto de carácter técnico que se evalúa siguiendo los parámetros previstos en el Decreto 1507 de 2014-Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional-.

En lo que respecta a la validez del dictamen pericial, el artículo 226 del CGP aplicable al procedimiento laboral en virtud de la remisión establecida en el artículo 145 del CPT y SS, establece que, el mismo debe ser rendido por una persona especializada, debe ser presentado bajo la gravedad del juramento (el cual se entiende prestado con la firma del dictamen), debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; en él se explicarán los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones y debe tener un contenido mínimo de declaraciones e informaciones que den cuenta de la identidad, idoneidad e imparcialidad de quien lo rinde.

Para el caso se precisa que todos los Dictámenes como son el de Seguros de Vida Alfa, Junta Regional de Calificación de Invalidez, Junta Nacional de Calificación de Invalidez, y el de la IPS Universitaria realizaron las experticias con el Decreto 1507 de 2014 por ser el vigente a la fecha.

Firmeza de los dictámenes:

Para resolver la petición, resulta de fundamental importancia recordar que la firmeza de los dictámenes emitidos por los órganos competentes no es definitiva y su valor probatorio puede ser atacado ante el juez laboral mediante el procedimiento ordinario, utilizando para el efecto diferentes medios probatorios que permitan demostrar que existe una pérdida de capacidad superior a la establecida, o que la fecha de estructuración puede ser anterior o posterior, o el **origen puede variar.**

Lo importante en estos casos es que se demuestre que incurrió la entidad calificadora en un error de carácter técnico, por cuanto aquellas que entrañan una controversia de orden jurídico están atribuidas al Juez del Trabajo. **(Sentencias 11910 del 29 de septiembre de 1999, SL16374 del 4 de noviembre de 2015 y SL4571 del 23 de octubre de 2019)**

La técnica, requisitos y procedimiento para la calificación de la invalidez se encontraba para la fecha de los hechos regulada por el Decreto 1507 de 2014 - Manual único de Calificación de Invalidez-MUCI-, y con base en esta norma lo realizó Seguros de Vida Alfa, por lo que cualquier ataque dirigido a desvirtuar la eficacia de los dictámenes emitidos por los órganos competentes, debe demostrar sus falencias técnicas evidenciando los errores en los que el experto o expertos incurrieron o aquellas patologías que se desconocieron al valorar las condiciones en que se encontraba la persona que fue calificada.

Dicha norma define la fecha de la estructuración laboral como: *Se entiende como la fecha en que una persona pierde un grado o porcentaje de su capacidad laboral u ocupacional, de cualquier origen, como consecuencia de una enfermedad o accidente, y que se determina con base en la evolución de las secuelas que han dejado éstos.*

Para el estado de invalidez, esta fecha debe ser determinada en el momento en el que la persona evaluada alcanza el cincuenta (50%) de pérdida de la capacidad laboral u ocupacional. ' Esta fecha debe soportarse en la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica y puede ser anterior o corresponder a la fecha de la declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral. Para aquellos casos en los cuales no exista historia clínica, se debe apoyar en la historia natural de la enfermedad. En todo caso, esta fecha debe estar argumentada por el calificador y consignada en la calificación...

Con el objeto de demostrar los errores de tipo técnico en que incurrió la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, la actora presentó al despacho una experticia realizada por el perito de la IPS Universitaria José William Vargas Arenas, perito quien dijo en su calificación que la fecha de la estructuración era el **20 de abril de 2013.**

La Juez en su sentencia consideró que el Dictamen de la IPS Universitaria carecía de inconsistencias y que no ofrecía credibilidad para dejar sin efecto los demás y por tanto la fecha de la estructuración de la enfermedad de la actora era 31 de marzo de 2016.

La Sala al analizar la prueba en su conjunto bajo los criterios de la sana crítica y libre formación del convencimiento considera que en el presente caso no existen elementos de juicio para determinar que las experticias rendidas por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia y la Junta Nacional Calificación de Invalidez, se hayan equivocado en sus experticias al concluir que la fecha de la estructuración del estado de invalidez fue **31 de marzo de 2016**

Lo primero que se observa de la historia clínica como de los diferentes dictámenes es que, en efecto la actora comenzó a consultar por varias dolencias, desde el año 2011, y que posteriormente en el año 2016 en cita por neurología fue diagnosticada con “Síndrome extrapiramidal juvenil tipo enfermedad de Parkinson, con afectación bilateral, dolor crónico en región cervical y hombro congelado”, comenzó manejo de terapia y clínica del dolor, por terapia física y ocupacional.

De la historia clínica se observa que la actora sí tuvo un cambio en su recuperación como se dijo en citas del año 2015, fue suspendida toda la medicación, tenía buen manejo por la clínica del dolor, es decir, por más que su enfermedad haya tenido antecedentes desde el año 2013 e incluso con anterioridad, para este momento no se había configurado en la actora su estado de invalidez como realmente ocurrió en voces del neurólogo tratante y de las Juntas de Calificación desde 31 de marzo de 2016.

En la historia clínica por ejemplo en citas como la del 24 de septiembre de 2015 se observa que consulta por dolor en el hombro, cervical y temblor, sin embargo, aún este diagnóstico de enfermedad de “Parkinson juvenil” no había sido diagnosticado con claridad.

Y es que para el 31 de marzo de 2016, ya el neurólogo manifestó que encontró en la actora unos síntomas fuertes asociados a la enfermedad del Parkinson y que estaban siendo de difícil manejo, por lo que esa fue la razón que llevó a las Juntas a entender que si bien se encontraba en tratamiento médico desde hacía tiempo, sin embargo tenía un buen pronóstico de mejoría, que no permiten manifestar que la invalidez se estructuró en el año 2013 como lo pretende el perito de la IPS Universitaria, encontrándose que dicho perito en su dictamen tuvo en cuenta el inicio de las dolencias y que había dejado de trabajar desde el año 2013, pero esta situación no es de recibo, porque no tuvo en cuenta el tiempo de una posible rehabilitación que se le debe dar a toda enfermedad, sumado a que el dictamen debe fundarse es en los hallazgos clínicos e historia clínica no

en conceptos personales como el hecho que la señora dejó de laborar desde 2013, porque esa situación ocurrió por voluntad de la actora y no está medicamente demostrado que fue por la enfermedad.

Es decir, si bien le asiste razón al perito de la IPS Universitaria de la U de A., en que para el año 2013 la actora contaba con múltiples dolencias, incluido el temblor que posteriormente fue diagnosticado como “Parkinson juvenil”, no significa que la fecha de estructuración necesariamente tenga que coincidir con el inicio de los síntomas, sino con el momento en el cual y según concepto médico se terminan las opciones de tratamiento y se definen las secuelas definitivas.

A partir del análisis de esta prueba se encuentra que el Dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez de Antioquia narró de una forma clara, precisa, detallada y objetiva cuáles fueron sus métodos evaluativos, explica las razones por las que consideró que la fecha de la estructuración del estado de invalidez fue 31 de marzo de 2016 y no 20 de abril de 2013 como lo estableció el perito de la IPS Universitaria, aspectos que dan cuenta del cumplimiento de las condiciones de validez y eficacia de la prueba pericial consagradas en el artículo 226 del CGP, por lo tanto encuentra esta Sala convencimiento en la misma para declarar que la señora Alba Robiria Calle Vargas, tiene una pérdida de capacidad, pero estructurada el **31 de marzo de 2016**.

La corte Suprema de Justicia sobre el tema de los dictámenes ha expresado en sentencias como la **SL2349 de 2021 del 28** de abril de 2021 **MP Iván Mauricio Lenis** que:

Así las cosas, las partes pueden discutir el contenido de los dictámenes que emiten las juntas de calificación de invalidez ante la jurisdicción ordinaria laboral; incluso, en el curso del proceso, el juez puede como en este caso, ordenar una nueva valoración para decidir conforme a la sana crítica, en relación con la pretensión que se reclama. Y en ese contexto, tal dictamen no tiene que ser necesariamente emitido por la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez, sino que puede serlo por otro ente especializado en el asunto objeto de valoración.

Al definir un asunto en el que se opongan diferentes conceptos científicos sobre el estado de salud de una persona, los jueces pueden soportar su decisión en el que les ofrezca mayor credibilidad y poder de convicción. Sobre este particular, en la sentencia CSJ SL-4346-2020 la Sala asentó

De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, el estado de invalidez se determina, en primera oportunidad, por las entidades de seguridad social y las juntas de calificación de invalidez, conforme al manual único para la calificación vigente al momento de su práctica -decretos 917 de 1999 o 1507

de 2014, según el caso (...). Aunque la Corte ha admitido la relevancia de los dictámenes que expiden las juntas de calificación de invalidez por tratarse de conceptos técnicos y científicos emanados de órganos autorizados por el legislador, lo cierto es que estos constituyen un medio de prueba y, como tal, deben someterse a la valoración del juzgador bajo los principios de libre formación del convencimiento y apreciación crítica y conjunta de la prueba, previstos en los artículos 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CSJ SL, 18 mar. 2009, rad. 31062, CSJ SL, 18 sep. 2012, rad. 35450, CSJ SL3090-2014, CSJ SL9184-2016, CSJ SL697- 2019, CSJ SL3380-2019, CSJ SL 3992-2019 y CSJ SL5601-2019). En esa medida, el juez no puede simplemente ignorar las circunstancias que rodean el caso, la conducta procesal y los demás elementos probatorios adosados, pues todos, en conjunto, permiten determinar el momento en el que se produce, de manera definitiva, la disminución de la capacidad laboral de la persona.

De la pensión de invalidez

Para el presente caso al estar establecido que la actora acredita una pérdida de capacidad laboral superior al 50% y que la fecha de estructuración es 31 de marzo de 2016 procede a Sala a verificar si cumple con la densidad de semanas exigidas para acceder a la pensión de invalidez solicitada.

Respecto de los requisitos de la pensión de invalidez se tiene que por regla general la norma aplicable es la que se encuentre vigente al momento de producirse el estado de invalidez.

Para el caso como la fecha de la estructuración de la demandante fue el 31 de agosto de 2013, por tanto, la norma aplicable al caso es el art. 39 de la ley de la ley 100 de 1993 modificada por el art. 1° de la ley 860 de 2003, que reza

Artículo 39. Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:

...Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.

De acuerdo a la historia laboral aportada al proceso se tiene que la demandante dejó de cotizar desde agosto de 2013, no acreditando 50 semanas dentro de los 3 años anteriores al estado de invalidez, es decir, entre 31 de marzo de 2013 y 31 de marzo de 2016, lo que lleva a que no acredita el requisito de la densidad de cotizaciones que exige la norma para acceder a la pensión de invalidez solicitada.

Por lo anterior se encuentra que la sentencia de primera instancia está ajustada a derecho y debe ser **Confirmada.**

Costas

Sin costas en esta instancia

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

CONFIRMAR la providencia de primera instancia dictada por la Juez Quince Laboral del Circuito de Medellín, el día **7 de abril de 2022**, en el proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por **ALBA ROBIRIA CALLE VARGAS** contra **PORVENIR S.A., JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ**, de conformidad con lo indicado en la parte motiva.

Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica por **EDICTO**

LOS MAGISTRADOS



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Alba Robiria Calle Vargas
DEMANDADO	Porvenir S.A. y otros
RADICADO	05001-31-05-015-2018-0614-01
DECISIÓN	Confirma sentencia
MAGISTRADO PONENTE	CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/131> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 1 de noviembre de 2022 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 1 de noviembre de 2022 a la 5:00pm


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO